



Un acuerdo entre manifestantes y el Gobierno de Bolivia sería “una salida honorable para ambas partes”

Posted on Junio 13, 2026

En las organizaciones campesinas y obreras movilizadas desde hace más de un mes a lo largo de Bolivia, admitieron cansancio y debilitamiento. Se abrieron nuevamente a dialogar con el gabinete del presidente Rodrigo Paz, con el fin de garantizar que se frenarán las políticas desarrolladas en los últimos seis meses.

Con 43 días de protestas contra la Administración actual, comenzó a notarse el agotamiento en las organizaciones movilizadas, tanto obreras como campesinas. Solicitaron al Gobierno abrir mesas de diálogo para tratar las demandas de los sectores sociales involucrados.

En el Ejecutivo evaluaron que se está llegando a la fase final de las protestas, las cuales fueron manejadas con aparente éxito por el gabinete, con apenas seis meses en el Casa Grande del Pueblo. Y lo más importante hasta el momento: Paz evitó usar su último recurso, la declaratoria del estado de excepción.

En los sectores movilizados indicaron a Sputnik que el Gobierno asumió la estrategia de alargar el

conflicto, hasta que se consumiera solo. Mantener a miles de campesinos y obreros durante más de un mes en calles y carreteras requiere de un gran esfuerzo, e implica un desgaste notable para las organizaciones, cuyos líderes ahora son convocados por sus bases para dialogar con el mandatario local y sus ministros.

□□ Un acuerdo entre manifestantes y el Gobierno de Bolivia sería "una salida honorable para ambas partes": analista

□ En las organizaciones campesinas y obreras movilizadas desde hace más de un mes a lo largo de Bolivia, admitieron cansancio y debilitamiento. Se abrieron...
pic.twitter.com/7ghXtemS6x

— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 13, 2026

Adalberto Ticona, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) dijo a este medio: "Si no podemos ganar, al menos vamos a empatar". La Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo invitaron a los bandos enfrentados a firmar un Gran Pacto Social, que podrían aceptar los movilizados en más de 80 puntos de bloqueo de todo el país.

Ticona también reconoció que en las ciudades existe un descontento creciente con las movilizaciones, que piden la renuncia de Paz. En la última marcha que bajó desde la ciudad de El Alto a La Paz (oeste), el 10 de junio, la acción policial para dispersar con gases a los manifestantes, además de capturar a 50 de ellos, fue aplaudida por algunos ciudadanos paceños.

Un día después, los manifestantes se replegaron del punto del bloqueo en la autopista El Alto-La Paz, la cual había permanecido férreamente cerrada en las últimas semanas. De inmediato se situó la Policía en este punto para garantizar el tránsito entre ambas ciudades. También en la zona alteña de Río Seco, de donde parte la carretera que lleva al lago Titicaca, se retiraron los indígenas aymaras que se habían asentado allí en mayo pasado.

A la ciudad de La Paz comenzaron a llegar alimentos y combustibles, por el levantamiento de varios puntos de bloqueo y por el hallazgo de vías alternas, a menudo inseguras para el recorrido de vehículos de gran porte. Luego de semanas de conflictos insostenibles, pareciera que inevitablemente el país volverá a la tranquilidad.

Un plan con doble filo

Ticona evaluó que el Gobierno de Paz impulsó "una estrategia de desgaste. Pero estamos viendo que el desgaste es de ambos lados, tanto de los bloqueados como de los bloqueadores. La sociedad misma está

en una contradicción de posiciones, por necesidad más que todo, por el bolsillo, por el estómago. El Gobierno está motivando eso”, que es el enfrentamiento entre los movilizados y quienes en las ciudades solamente quieren seguir con su cotidianidad.

El referente campesino consideró que las acusaciones de “narcoterrorismo” vertidas por Paz también afectaron a la imagen de los manifestantes en las ciudades. Pero observó que, en los hechos, el señalamiento duró poco ante la evidencia del caso “narcomaderas”, que según las primeras investigaciones contaría con la participación necesaria de autoridades públicas para viabilizar la exportación de maderas con 108 toneladas de drogas mimetizadas en el cargamento.

Según Ticona, “esta semana es vital para que se tomen decisiones. Algo tendrá que salir. Si no se gana, se empata”.

Los campesinos quieren que Paz les garantice que, en lo restante de su mandato, hasta 2030, dejará a un lado las políticas neoliberales encaradas en estos seis meses. “Tendría que haber un posicionamiento programático de qué es lo que va a hacer el Gobierno en estos cuatro años que le quedan. No puede ir por el asalto de los recursos naturales”. Y agregó: “Tendría que haber un Pacto Social” con el presidente.

Ticona se mostró a favor de la conformación “de mesas técnicas y políticas. Los resultados tendrían que visibilizarse en una agenda legislativa. Se deben priorizar leyes para fortalecer la economía, pero respetando nuestra Constitución. Aunque no veo tan fácil que el Gobierno acepte, porque ellos están desesperados por entregar nuevamente los recursos naturales a las grandes corporaciones”.

“Así haya pacificación o desbloqueo, así levantemos esta medida de presión, siempre vamos a estar en posición de resistencia desde las regiones, ya vigilantes de que no seamos afectados con leyes malditas que puedan nuevamente atreverse a implementar”, sostuvo.

Fuerza contraproducente

En diálogo con Sputnik, el analista Emilio Rodas consideró que “el Gobierno ha apostado por el desgaste de la movilización. No dieron resultado ninguno de los intentos de acciones de fuerza, porque más bien provocaban una reacción de fortalecimiento de los puntos de bloqueo cada vez que la Policía intentaba desbloquear”.

“Considero que ese cálculo ha tomado en cuenta el Gobierno. Y claro, viene apostando al desgaste sistemático, al debilitamiento con alguna negociación parcial con algunos actores de la movilización”, añadió.

En este sentido, evaluó que en barrios de la ciudad de El Alto (oeste) “ha habido un agotamiento. Se

mantienen puntos de bloqueo en la zona norte, pero en general hay un agotamiento de los puntos de bloqueo”.

Por ello, “la apuesta del Gobierno coincide con un debilitamiento orgánico, con una falta de claridad estratégica respecto de hacia dónde va la movilización”.

Para Rodas, “el presidente no ha usado el estado de sitio, pese a tener ya la ley de excepción. Se ha usado esa ley de excepción como una espada de Damocles para supuestamente mantener viva la amenaza de la represión. Pero se gana más políticamente con el desgaste. Le está dando resultados al Gobierno”.

Sobre un diálogo que nuevamente se abre entre manifestantes y Gobierno, Rodas opinó que “es una salida honorable para ambas partes”.

“Resolver el problema financiero del país requiere de una decisión política fuerte, porque la apuesta de Paz por el endeudamiento no es aceptada por la mayoría”, apuntó.

Más allá de la resolución de este conflicto, para el analista “Paz va a seguir teniendo un Gobierno débil, pese al acompañamiento del sector privado. Pero no va a poder acceder al endeudamiento abierto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros organismos de crédito, porque lo que le va a exigir el fondo a Paz es inaceptable para los movilizados. Entonces el presidente está en una encrucijada muy crítica, difícil de superar”, sostuvo Rodas.

El Maipo/PL